

9 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalecio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte á que fueron sentenciados por el Gefe político de Córdoba, como reos del delito de robo con asalto y heridas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que han promovido estos juicios acumulados, los reos Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalecio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte que les impuso la Gefatura política del Canton de Córdoba, por los delitos de robo con asalto y heridas, concurriendo circunstancias agravantes, con violacion de las garantías individuales que les conceden los artículos 14, 16, 23 y 29 de la Constitucion federal, en razon de no haber sido salteadores de camino, único caso en que podia imponérseles dicha pena legalmente.

Tambien manifestaron, que suplicaban al juzgado se sirviera suspender el acto reclamado, y así se decretó por razon de su urgencia y naturaleza.

Y constando de autos que fueron indultados por el Ejecutivo del Estado, fojas 84 de la causa, Luz Mereles y Blas Milan, en virtud de su menor edad, ha quedado sin objeto, respecto de ellos, el presente juicio.

En cuanto á los demas, Eusebio Pacheco, Severo Indalecio y Marcelo Antonio, hay que tener en consideracion: que segun las constancias de la propia causa, los delitos porque han sido juzgados, fueron cometi-

dos en poblado y no en camino ó en despojado que es lo mismo, para los efectos del artículo 23 de la Constitucion, que previene terminantemente, que queda limitada la pena de muerte á los casos que claramente expresa, entre los cuales se enumeran al *salteador de camino*; que para los salteadores y plagiarios no están suspendidas las garantías que otorgan los citados arts. 23 y 29, sino unicamente las que menciona en su artículo 19, la ley de 3 de Mayo del año pasado, ni podian ser suspensas, por que lo prohibe expresamente el referido artículo 29, en razon de que aseguran la vida del hombre: que si bien el artículo 39 de la citada ley, sujeta á la pena á los salteadores sin distincion alguna, es con infraccion del repetido artículo 23, que como ya tiene manifestado, limitó la pena de muerte al salteador de camino y á otros casos, que no son los cometidos por los quejosos; que estos son acreedores sin embargo, á la pena de presidio, que es la que debió habérseles impuesto, por que no emanando el relatado artículo 39 de la ley de 3 de Mayo del año pasado, de la Constitucion federal, siendo así que se opondrá á su artículo 23, los jueces de cada Estado, como lo es en este caso la Gefatura de Córdoba, y todos los demas de la Federacion, Distrito federal y Territorio de la Baja California, deben arreglarse á dicha Constitucion, en todos los negocios y causas en que conozcan, como la Suprema ley de la Union, con preferencia á cualquiera otra que se expidiere en sentido contrario; que así lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia en una de sus ejecutorias de 24 de Julio de 1871, pronunciada en un juicio de amparo promovido por tres reos de robo con asalto en una casa situada cerca de un pueblo del Estado de Guadalajara, y se encuentra en el Semanario Judicial, 2ª parte, 2º tomo, pagina 142; que no siendo posible, legalmente hablando, la suspension de las garantías que aseguran la vida del hombre, es evidente que conforme al artículo 23, debe limitarse la pena de

muerte, á los casos que el expresa, no obstante lo preceptuado en el artículo 3º de la ley de Mayo del año pasado, de conformidad con lo que ordena el 126; por cuyos fundamentos, y considerando violadas en las personas de los quejosos las garantías que han señalado en sus ocurso, pide á V. se sirva fallar en definitiva accediendo á la solicitud de los promoventes, con exclusion de los que han sido indultados, por no tener ya objeto el amparo en cuanto á ellos.

H. Veracruz, 20 de Abril de 1874.—*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Veracruz, Agosto 10 de 1874.—Vistos estos juicios de amparo promovidos por Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalcio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte que les impuso el Gefe político de Córdoba, por considerarlos reos del delito de asalto y robo con heridas, en despoblado, y cuyos juicios se mandaron acumular por haberse intentado contra la misma providencia que comprende á todos los quejosos y fué dictada por la misma autoridad, siendo el mismo el delito que á aquellos se imputa; vistos los autos respectivos en que, á solicitud de los quejosos referidos, se mandó suspender la ejecución de la sentencia; lo informado por dicho Gefe político; las constancias que obran en la causa seguida por aquella Gefatura á los reos mencionados; las comunicaciones telegráficas de la misma, en que participa haber sido indultados Blas Milan y Luz Mereles; lo pedido por el C. Promotor fiscal y cuanto mas ver convino.

Considerando: que segun aparece de la causa instruida á los quejosos, el delito de asalto y robo con heridas por el cual fueron juzgados y sentenciados á muerte, fué cometido en la rancharía de Atoyac el día 5 de Mayo del año próximo pasado, que en el sentir de la ley no puede decirse que ha-

ya sido cometido en despoblado, puesto que la rancharía de Atoyac tiene la bastante poblacion para defenderse de un pequeño número de salteadores, siquiera con solo dar voces de alarma; que por lo mismo, tampoco puede considerarse perpetrado aquel delito en camino, como requiere el artículo 23 de la Constitucion, cuyo caso es uno de los á que ha reservado la pena de muerte.

Considerando, ademas: que segun lo terminantemente prevenido por el artículo 29 de la misma Constitucion, solo en los casos de invasion, perturbacion grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pongan á la sociedad en grave peligro ó conflicto, pueden suspenderse las garantías otorgadas por la Constitucion, con *excepcion de las que aseguran la vida del hombre*; que por consiguiente, aplicar la pena de muerte á quien no ha sido salteador de caminos ó en despoblado, es violar el citado artículo 23 constitucional.

Considerando: que segun el artículo 126 de la repetida Constitucion, esta, las leyes del Congreso de la Union que emanan de ella, son la ley Suprema de la República, á la que se sugetarán los jueces & y desde el momento que la ley de 3 de Mayo de 1873 se interpreta haciendo extensiva la pena de muerte á toda clase de salteadores, no debe considerarse como emanacion de la Constitucion, que en su artículo 23 restringe la pena de muerte á solo el saltador de camino; que dicha ley pugna tambien con el artículo 29 constitucional, puesto que aun cuando se considere expedida por algunos de los motivos que dicho artículo expresa, se ha comprendido á los quejosos en ella, considerando tambien suspensas las garantías que aseguran la vida del hombre, siendo así que dicho artículo previene lo contrario, resultando en consecuencia violado el artículo 29.

Considerando, por último: que los quejosos, Luz Mereles y Blas Milan, han sido indultados de la pena de muerte por la Legislatura del Estado, y por tanto, respecto

á ellos no tiene ya objeto el juicio de amparo, con cuanto mas ver y considerar convino, de conformidad con los artículos de la Constitucion antes citados, de los 101 y 102 de la misma, y de las prescripciones relativas de la ley de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero: la Justicia de la Federacion ampara y protege á Eusebio Pacheco, Severo Indalecio y Marcelo Antonio, contra la sentencia de muerte que contra ellos dictó el C. Gefe político de Córdoba.

Segundo: notifíquese; sáquense las copias prevenidas para su publicacion, y originales remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo provoyó y firma, el C. Juez de Distrito del Estado. Lo testificamos.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia. H. Veracruz, 14 de Agosto de 1874.—*Lic. Luis I. Gómez.*—De asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 1º de 1874.—Vistos los recursos de amparo promovidos ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalecio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte á que fueron sentenciados por el Gefe político de Córdoba como reos del delito de robo con asalto y heridas, por violarse con la aplicacion de esa pena las garantías que consignan los artículos 23 y 29 de la Constitucion federal, en razon de haber sido cometido en poblado el delito de que se les ha hecho cargo; visto el auto del Juez de Distrito que por las razones legales que expresa, ordenó se acumularan los escritos de los quejosos en solicitud del amparo; visto lo alegado por las partes; el pa-

recer fiscal y cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que Luz Mereles y Blas Milan han sido indultados de la pena capital, motivo por el cual no tiene ya objeto el presente recurso respecto de ellos.

Considerando: que Eusebio Pacheco, Severo Indalecio y Marcelo Antonio, estan convictos y confesos de haber tomado parte en compañía de mas de veinte personas, en el asalto de la ranchería de Atoyac, que tuvo lugar la noche del 5 de Mayo del año pasado.

Considerando: que la ley de 23 de Mayo de 1872, declara salteadores á los que en gavilla atacaron las poblaciones con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes; y por consiguiente, comprendidos entre los delincuentes á los cuales el artículo 23 de la Constitucion, permite aplicar la pena de muerte.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: 1º: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 10 de Agosto del presente año, que declaró haber lugar al amparo de la Justicia federal, en el presente caso. 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege á Eusebio Pacheco, Severo Indalecio y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte á que fueron sentenciados por el Gefe político de Córdoba.

Devuélvansé los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre

10 de 1874.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por el C. Cristobal Montiel, en representacion del C. Mariano del Conde, contra el comisionado de hacienda del Gobierno del Estado, por cobro de contribuciones, multas y recargos relativos á unos terrenos de agostadero.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Matamoros, Julio 22 de 1874.—*Vistos:* el escrito en que el C. Lic. Cristobal Montiel, como apoderado del C. Mariano del Conde, vecino de México, promovió el presente juicio de amparo, porque para hacer efectivo el pago de contribuciones que ejecutivamente se le exigen de ciento cincuenta sitios de agostadero, que en la municipalidad de Reynosa tiene su poderdante, el comisionado de hacienda del Estado, usando de la facultad económico-coactiva, le embargó terrenos, rentas y dinero, con lo que reputa violadas algunas de las garantías que la Constitución de la República le otorga: el otro sí, en donde pide que se suspenda el acto reclamado; el proveído de conformidad; el informe de la autoridad inmediata ejecutora, con sus justificantes respectivos; lo expuesto por el C. Promotor fiscal, evacuando el traslado que se le corrió; el auto que mandó abrir el negocio á prueba; las rendidas dentro del término; el alegato del Ministerio público y no el de la parte actora, por que exhibido fuera del periodo oportuno, no se le admitió; y todo lo demas que debió tenerse presente y ver convino.

Considerando: que el quejoso señala seis violaciones constitucionales, haciendo consistir la primera, en que la agencia fiscal

TOMO VI.—PARTE II.

para exigirle las contribuciones relativas á los cuatro años de 1870, 1871, 1872 y 1873, segun liquidacion de fojas 29, se apoya en una ley posterior de 23 de Junio de 1873, del Congreso del Estado, que no se puede aplicar sin darle efecto retroactivo.

Que aquellas contribuciones se arreglaron, la del año de 1870, á la ley de 28 de Noviembre de 1868; la de 1871, á la de 27 de Agosto de 1870; la de 1872, á la de 25 de Noviembre de 1871 y la de 1873, á la de 13 de Noviembre de 1872; cuyas leyes, la primera en su art. 35; la segunda, en el 25, 26 y 27; la tercera, en el 35, 36 y 37; y la cuarta, en el 30, 31 y 32, contienen franquicias en favor de los deudores; pero con especialidad las tres últimas, pues previnieron que los morosos sean demandados por los agentes fiscales, ante el Juez que corresponda, por la contribucion y multas; que este Juez los oiga y que los oiga en forma; que califique las causas que expongan, y que segun fueren ó no justas, los condene á solo el pago de la contribucion, ó al de ésta y los recargos.

Que la citada ley de 23 de Junio, declara en su art. 1º, que "la facultad económico-coactiva para exigir el cobro de los rezagos de las contribuciones pendientes reside directamente en el Gobierno, sus comisionados, agentes fiscales y alcaldes de los pueblos," de modo que vuelve sobre lo pasado, que lo cambia sustancialmente, con notorio perjuicio de los deudores que eran objeto de las precedentes disposiciones, quitándoles derechos favorables por ellas concedidos, y estableciendo un nuevo Tribunal para juzgarlos, con lo que se ataca en todas sus partes el art. 14 del Código de 1857, que dice: "no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley."

Que la segunda violacion se funda, en la incompetencia del comisionado de hacienda,